

Santiago, veinte de junio de dos mil veintidós.

VISTOS:

El Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, por sentencia de doce de enero del año en curso, condenó a Christopher Alexander Véliz Severino, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, en calidad de autor del delito de porte ilegal de arma de fuego, en grado de consumado, cometido el día 19 de julio de 2020, en la comuna de La Granja.

Se ordenó el cumplimiento efectivo de la pena privativa de libertad impuesta, reconociéndole los abonos que indica y se eximió al sentenciado del pago de las costas de la causa.

La sentencia fue impugnada de nulidad por la defensa del imputado, recurso que se conoció en audiencia pública el pasado uno de junio. Luego de la vista se citó a la lectura del fallo para el día de hoy, según consta del acta suscrita en esa misma fecha.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que por el recurso deducido se invoca únicamente la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política de la República o por los Tratados Internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, defecto que alega se configura en el caso en estudio, por la transgresión del debido proceso -en su aspecto de derecho a un proceso previo legalmente



tramitado-, de la libertad personal y del derecho del acusado a no auto incriminarse y a guardar silencio.

En este sentido arguye que el procedimiento policial que culminó con la detención de su representado, se inició por un control de identidad practicado fuera de los casos que permite la norma, atendido que no existió un indicio que habilitara a ello, siendo insuficiente al efecto la denuncia anónima de la que dieron cuenta los policías. Añade que los funcionarios no observaron a su representado portar un arma de fuego ni disparar, tampoco se dio a la fuga ni se desprendió de algún objeto, por lo que en su opinión, no se reunían los requisitos establecidos en el artículo 85 del Código Procesal Penal, transformando el registro de Christopher Alexander Véliz Severino y la incautación de especies en actuaciones ilegales.

Solicita en la conclusión que se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, se retrotraigan los autos al estado de realización de un nuevo juicio oral excluyéndose del auto de apertura toda la prueba ofrecida por el Ministerio Público.

SEGUNDO: Que como se desprende del recurso, las afectaciones en que la defensa fundamentó la causal se originarían con motivo de la recolección de evidencia que se tacha de ilícita, inmersa, según su parecer, en un procedimiento de control de identidad al margen de la normativa que lo regula, y su posterior incorporación y valoración en el juicio oral. En particular se cuestiona la realización de diligencias investigativas policiales de cuya intervención arranca, de modo trascendental, la imputación delictiva en contra de Christopher Alexander Véliz Severino.

TERCERO: Que como ya ha sostenido esta Corte en diversos pronunciamientos -SCS Roles N° 11767-13, de 30 de diciembre de 2013; N°



29534-14, de 20 de enero de 2015; N° 5711-15 de 09 de junio de 2015 N° 22199-16, de 1 de junio de 2016, entre otros-, si bien es efectivo que la Constitución Política de la República entrega al Ministerio Público la función de dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, regla que repite su Ley Orgánica Constitucional y múltiples instrucciones de parte de la autoridad superior de aquél, el Código Procesal Penal regula las funciones de la policía en relación a la investigación de hechos punibles y le entrega un cierto nivel de autonomía para desarrollar actuaciones que tiendan al éxito de la investigación, conciliando su eficacia con el respeto a los derechos de las personas, para cuyo efecto el artículo 83 del Código Procesal Penal, la compele a practicar la detención sólo en casos de flagrancia, situación que puede generarse con ocasión de un control de identidad.

CUARTO: Que la sentencia consignó a propósito de los cuestionamientos formulados por el recurrente, que “a la fecha de que acontecieron los hechos materia de este juicio, 19 de julio de 2020, el país se encontraba bajo estado de excepción constitucional de catástrofe a raíz de la pandemia del COVID-19, estado decretado por el Presidente de la República a través del decreto supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por el término de 90 días, plazo que fue prorrogado por decreto supremo N°269, de fecha 12 de junio de 2020, por otros 90 días, de modo que a la fecha en cuestión el país se encontraba en dicho estado de excepción y específicamente la comuna de La Granja estaba en fase uno, de manera que la circulación de personas por la vía pública se encontraba restringida, pudiendo movilizarse solo con el debido pase de movilidad, permiso con el que no contaba el acusado Véliz Severino, conforme el mérito de la prueba rendida por el ente persecutor y además lo reconoció el



propio imputado al momento de prestar declaración, limitación cuyo cumplimiento debía ser controlado entre otros por los funcionarios de Carabineros”.

Establecido lo anterior, los sentenciadores afirmaron que “los funcionarios de Carabineros que actuaron en el procedimiento concurrieron al sitio del suceso” pues “mientras cumplían sus labores de patrullaje en el sector jurisdiccional de la unidad recibieron un comunicado radial de Cenco en el que informaban que debían concurrir a la intersección de los pasajes Doce Oriente con pasaje F, comuna de La Granja, debido a que en el lugar se encontraba un sujeto disparando, agregando en forma detallada la forma en que vestía esta persona, chaqueta azul clara, pantalones grises y zapatillas negras”, luego de lo cual coligieron “tal como lo señaló el funcionario Sepúlveda, se dirigió con el Sargento Aburto en un carro policial al lugar, sin que hubiesen advertido la presencia de un sujeto disparando, algo que resulta normal que suceda por el tiempo que transcurre entre que se recibe la denuncia, es transmitida por radio y se llega al lugar denunciado, pero en este caso, ambos funcionarios según lo manifestó el Cabo Sepúlveda vieron a un hombre en el lugar, llamándoles inmediatamente la atención que vestía de la forma que les fue informado en el llamado de Cenco, ropas que por lo demás coinciden plenamente con la descripción que hizo de ellas el acusado al momento de prestar declaración, esto es chaqueta de color azul, pantalón plomo y zapatillas negras, unido también a que por la fase sanitaria en que se encontraba la comuna de La Granja, no podía andar gente circulando sin el permiso respectivo”.

En base a tal atestado, los magistrados concluyeron que “no obstante no haber sorprendido al acusado disparando, resulta totalmente justificado el hecho que ambos funcionarios bajaran del carro policial y se acercaran a él



para solicitarle su pase de movilidad y su cédula de identidad, no manteniendo en su poder ninguno de los dos documentos, hecho que por lo demás fue reconocido por el propio acusado al prestar declaración, de modo tal que ante la eventual comisión en primer lugar del delito de infracción al artículo 318 del Código Penal y también con el objeto de verificar la identidad de esta persona, resulta procedente que se le hubiese trasladado a la unidad policial, conforme al procedimiento de control de identidad establecido en el artículo 85 del Código Penal, norma que también autoriza que la policía sin necesidad de nuevo indicio proceda al registro entre otros de las vestimentas y fue justamente lo que realizó el funcionario Sepúlveda Sepúlveda, conforme a lo señalado en su declaración, oportunidad en que primero lo palpó por encima de su ropa pudiendo sentir a través de sus manos que bajo la chaqueta mantenía algún elemento en forma vertical, por lo que lo instó que se abriera dicha prenda pudiéndose percatar que mantenía oculta la escopeta recortada”.

En lo tocante al sobreseimiento dictado respecto de la infracción al artículo 318 del Código Penal, el tribunal señaló que “no empece a que los funcionarios realizaran las primeras diligencias en cuanto constatar un elemento objetivo, como es que encontrándose el acusado en la vía pública en circunstancias que tal situación estaba prohibida por razones sanitarias, pudieran indagar si tenía o no el documento que lo autorizaba para estar en el lugar y en caso de no poseerlo trasladarlo a la unidad policial para pedir instrucción al Fiscal de turno, tal como lo hicieron en este caso”.

QUINTO: Que para un adecuado entendimiento de lo que debe resolverse, es importante razonar sobre el contexto fáctico que usualmente rodea a una diligencia como la de la especie, porque los indicios de la probable comisión de un ilícito se encuentran usualmente en forma intempestiva,



situación que obliga a los policías a evaluar de inmediato la presencia de elementos susceptibles de tal estimación y que hagan procedente la actuación.

SEXTO: Que relacionando la acción cuestionada con las normas que le son aplicables, resulta simple inferir la legalidad del cometido de los funcionarios policiales. En efecto, según se estableció con la prueba de cargo, los funcionarios policiales recibieron un comunicado radial de Cenco, informándoles sobre un sujeto que se encontraba disparando en la vía pública, cuya vestimentas detalló y proporcionándoles la intersección específica del lugar donde se encontraba, por lo que dado el estado de excepción constitucional de catástrofe imperante a la fecha -que limitaba la libertad de desplazamiento-, y la precisión de los antecedentes mencionados, la información revestía seriedad y verosimilitud y que además instantes después fue corroborada con la presencia del acusado en el lugar señalado, quien efectivamente vestía de la forma que se indicó y en cuyo poder se encontró un arma de fuego recortada.

SÉPTIMO: Que, tal como se estableció en el fallo, existió en el caso *sublite* un indicio de la comisión del delito en cuestión por parte del acusado, motivo por el que no se transgredió la norma del artículo 85 del Código Procesal Penal ni garantía constitucional alguna, ya que la diligencia policial de excepción consistente en el control de identidad y el registro de sus vestimentas, ha de tenerse, en dichas circunstancias, como racional y justa, fundada en condiciones objetivas apreciadas por los funcionarios policiales que razonablemente permitían sostener la posibilidad de corresponderse con un hecho ilícito que les permitía proceder autónomamente, razón por la cual no se configura la causal de nulidad incoada.



OCTAVO: Que, en lo tocante a las alegaciones de vulneración de las garantías del acusado a no auto incriminarse y su derecho a guardar silencio, de la revisión del libelo no se divisa cómo tales infracciones se habrían producido, en caso de haber existido, motivo que por sí solo permite a esta Corte desestimar de plano el presente acápite de la causal en revisión.

NOVENO: Que en tales condiciones, el arbitrio de nulidad formalizado por la defensa de Christopher Alexander Véliz Severino, será desestimado.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373, 374 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del sentenciado Christopher Alexander Véliz Severino contra la sentencia de doce de enero del año en curso y el juicio oral que le precedió, en los antecedentes R.U.C. 2.000.725.532-3 y R.I.T. 321-2021, del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, los que, en consecuencia, no son nulos.

Se previene que el Ministro Sr. Llanos fue del parecer de rechazar el recurso de nulidad impetrado teniendo únicamente en consideración para ello lo siguiente:

1º) Que los hechos y circunstancias que tuvieron por acreditados los jueces del grado permiten concluir que el proceder policial fue en uno de los casos y en la forma prevista por las leyes, esto es, en una hipótesis de flagrancia descrita en el artículo 130 del Código Procesal Penal, compresión que resulta acertada considerando que a la fecha de los hechos, el país se encontraba bajo estado de excepción constitucional de catástrofe a raíz de la pandemia del COVID-19 y la comuna de la Granja estaba en fase uno, por lo que la circulación de personas por la vía pública se encontraba restringida, pudiendo desplazarse solo con pase de movilidad, no obstante lo cual el



acusado se encontraba en la vía pública sin el aludido permiso, escenario que impone a la policía la obligación de proceder en consecuencia.

2º) En estas circunstancias, en concepto del previniente, lo obrado configura una de aquellas gestiones para las cuales los agentes cuentan con la autorización del ordenamiento jurídico sin orden previa, ya que éste tuvo como objetivo cumplir con el deber funcionario de proceder a la detención de quienes están cometiendo delito, arbitrando las medidas necesarias para ello, de manera que no se presenta la infracción a la normativa citada por la defensa.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo de la Abogada Integrante Sra. Tavolari y la prevención de su autor.

Rol N° 4284-22



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veinte de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinte de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

